

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	: DIANA CECILIA RAMÍREZ ZULUAGA
DEMANDADOS	: FUREL S.A. Y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2021-00394-01
RADICADO INTERNO	: 334-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	:390

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita se DECLARE que entre la demandante y la sociedad FUREL S.A, actualmente representada por su Depositario Provisional o Administrador designado y posesionado por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS, existió un contrato de trabajo que terminó sin justa causa, por un despido injustificado.

Se CONDENE a los demandados, a pagar:

- \$2.634.778.00, por concepto de auxilio de cesantías correspondientes a 360 días del año 2020 y 46 días del año 2021, o el mayor valor que resulte probado.
- \$284.928 por intereses a la cesantía, correspondientes a 360 días del año 2020 y 46 días de 2021, o el mayor valor que resulte probado.
- \$379.642 por concepto de vacaciones proporcionales, por 71 días de años anteriores y más 46 días del año 2021.

- \$298.522 por primas de servicios correspondientes a 46 días laborados, o el mayor valor que resulte probado.
- \$10.625.638.00 por indemnización de perjuicios por despido injustificado por culpa del empleador, o el mayor valor que resulte probado.
- Que el demandante tiene derecho a recibir de los demandados el valor de 50 SMLMV, por concepto de indemnización de perjuicios morales por despido injusto, o el mayor valor que resulte probado.
- Que el demandante tiene derecho a recibir de los demandados la suma de \$77.875.00 diarios, ($\$2.336.256.00/30$), o el mayor valor que resulte probado, por concepto de indemnización moratoria contados a partir del 17 de febrero de 2021 hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor, o el mayor valor que resulte probado.
- \$77.875.00 diarios, ($\$2.336.256.00/30$), o el mayor valor que resulte probado, por concepto de indemnización por no haberle consignado las cesantías oportunamente en un fondo, contados a partir del 15 de febrero hasta el 16 de febrero de 2021 ($\$77.875.00 \times 2 \text{ días} = 155.750.00$).
- \$284.928.00.00, o el mayor valor que resulte probado, por concepto de indemnización por no haberle pagado a tiempo los intereses a las cesantías.
- Las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que la demandante prestó servicios personales mediante contrato de trabajo, inicialmente por obra o labor contratada desde el 20 de octubre de 2014; el 1º de junio de 2016, firmó el otro si N°1, donde se acordó que el contrato de trabajo por duración de obra o labor que los vinculaba se pactaba a término indefinido a partir del 20 de octubre de 2014, tiempo en el que se desempeñó como Profesional de Proyectos; que su último salario fue de \$2.336.256 mensuales, cifra que se mantuvo constante por lo menos durante los últimos tres meses, de terminada su relación laboral; el trabajo fue realizado en forma personal, bajo subordinación y dependencia, obedeciendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de trabajo establecido, sin que hubiera queja por mal comportamiento de la demandante; el 16 de febrero de 2021, recibió por parte de la accionada FUREL S.A, comunicado de terminación de contrato de forma unilateral.

Que el 12 de junio de 2018, la Fiscalía General de la Nación decretó medida cautelar de embargo y secuestro a la empresa FUREL SA, debido a ello la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIAL SAE SAS-, como administradora de los

activos entregados a la Nación a través del FRISCO; el 21 de junio de 2021, envió reclamación administrativa ante la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE-SAS y a FUREL SA; el 7 de julio de 2021, FUREL S.A. dio respuesta manifestando que no había flujo de caja para pagar las obligaciones, y a la fecha de la presentación de la demanda, la SAE SAS no dio respuesta. Y asegura que el Depositario Provisional de FUREL S.A, designado y posesionado por la Sociedad de Activos Especiales - SAE -, adeuda las pretensiones de la demanda.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La **SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS**, resaltó que dicha sociedad no es ni fue parte del contrato de trabajo al que hace referencia la demandante, por lo tanto, la sociedad no tiene conocimiento del acuerdo contractual ni de las condiciones que hayan realizado o podido realizar la demandante con la sociedad FUREL S.A.

En relación a los hechos de la demanda acepta que la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS no ha dado respuesta al derecho de petición. Que no es cierta la redacción de la medida cautelar, por lo que aclara que la Fiscalía 53 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del radicado 2018-00156 E.D., mediante Resolución de fecha 5 y 12 de junio de 2018, ordenó como medidas cautelares, la suspensión del poder dispositivo, el embargo y secuestro y toma de posesión de FUREL S.A, medida que se materializó mediante diligencia llevada a cabo 13 de junio de 2018, donde la Fiscalía 53 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dejó la disposición material y jurídica del bien incautado, a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS de conformidad con lo regulado en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014. En lo que tiene que ver con la respuesta dada por FUREL S.A al derecho de petición elevado por la demandante, dice que se remite al documento aportado y que en él se hace un reconocimiento de la deuda, plantea la situación económica de la empresa y manifiesta que cuenta con total disposición para el pago. Frente a los hechos restantes, indicó que no les consta.

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Y propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad solidaria, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de relación laboral, inexistencia de la obligación, independencia de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS respecto de la sociedad incautada, falta de causa en las obligaciones-

inexistencia de contrato laboral suscrito entre las partes, improcedencia de la sanción moratoria por acreditarse buena fe, prescripción, genérica.

Y concluye manifestando que nunca ha existido relación laboral o legal o reglamentaria entre el demandante y la sociedad Administradora del FRISCO, SAE SAS, el vínculo laboral alegado es con la sociedad FUREL S.A., bien que fue objeto de incautación afectado dentro de una acción de extinción de dominio y según la demandante, la relación laboral existe desde antes de la incautación; que a lo largo de la defensa, el eventual empleador directo de la demandante es la sociedad FUREL S.A., y no la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS; no existe responsabilidad solidaria de parte de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS, porque los servicios que prestó el demandante fue a favor de FUREL S.A., con quien suscribió contrato laboral y sin que se cumpla lo regulado en los artículos 34 y siguientes del CST; y la labor del secuestre judicial, es el cumplimiento de funciones administrativas de manera forzosa en virtud de un mandato legal, ejerciendo la representación legal de los bienes incautados, no por cuenta propia, sino a nombre de los mismos, más no por ser empleadores, ni propietarios del bien (expediente digital 09).

Y en la **contestación de la demanda, la sociedad FUREL S.A.** manifestó que no le constan que la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS no haya dado respuesta al derecho de petición de la demandante. Y acepta los demás hechos de la demanda y admite que a la demandante se le adeudan las prestaciones sociales, vacaciones, indemnización de perjuicios por despido injustificado por parte del empleador, indemnización de perjuicios morales por despido injusto; indemnización moratoria; indemnización por no haberle consignado las cesantías oportunamente en un fondo e indemnización por no haberle pagado a tiempo los intereses a las cesantías, porque la accionada no ha podido cumplir las obligaciones solicitadas por la demandante ante la imposibilidad de hacerlo, pues, FUREL S.A. no cuenta con los recursos administrativos y financieros, en razón a situaciones de hecho y de derecho ajenas a su voluntad de cumplimiento.

En lo que respecta a las pretensiones de la demanda, admite que a la demandante se le adeuden, las prestaciones sociales, vacaciones e indemnización de perjuicios por despido injusto, argumentando que la entidad reconoció el valor adeudado sin que se haya realizado el pago por falta de recursos, pero se opone frente a las demás pretensiones de la demanda y

asegura que el no pago no ha estado precedido de mala fe sino de la imposibilidad de hacerlo. Propuso como excepciones, las de inexistencia de terminación del contrato sin justa causa, buena fe exenta de culpa, la mora del art. 65 del CST debe probarse, falta de flujo de caja para pagar (expediente digital 12).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 20 de octubre de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que entre la Sra. Diana Cecilia Ramírez Zuluaga y la sociedad FUREL S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñarse como profesional de proyectos, y cuyos extremos temporales fueron entre el 20 de octubre de 2014 al 16 de febrero de 2021, devengando un salario de \$2.336.256, fecha para la cual le fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador el contrato de trabajo; declaró que no existe responsabilidad solidaria por parte de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE S.A.S, frente a las condenas proferidas en contra de la sociedad demandada FUREL S.A.

CONDENÓ a la sociedad FUREL S.A. a reconocer y pagar a la demandante los siguientes conceptos:

- \$2.634.778 por cesantías correspondientes a los años 2020 y proporcional del año 2021.
- \$284.928 por intereses cesantías correspondientes al año 2020 y proporcional del año 2021.
- \$379.642 por concepto de vacaciones proporcionales al año 2020 y 2021.
- \$298.522 por primas de servicios correspondientes al año 2021 proporcional.
- \$10.629.964 por concepto de la indemnización por despido injusto consagrada en el artículo 64 del C.S.T.

Sumas que deberán ser indexadas por la sociedad demandada FUREL S.A. al momento de su pago, excepto para la suma otorgada por concepto de indemnización por despido injusto.

ABSOLVIÓ a la sociedad FUREL S.A. de reconocer y pagar a la demandante

las pretensiones correspondientes a las indemnizaciones contempladas en el artículo 65 del C.S.T, la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la contenida en el artículo ordinal 3°, artículo 1° de la Ley 53 de 1975, la indemnización por perjuicios morales, y a la indexación de la condena por concepto de despido injusto.

ABSOLVIÓ a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE S.A.S, de todas las pretensiones incoadas por la demandante. y condenó en costas a la sociedad demandada FUREL S.A.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante apela la absolución de la indemnización moratoria del art. 65 del CST, por considerar que los motivos alegados por la accionada en la contestación por el no pago de las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, fueron la medida cautelar impuesta a la empresa FUREL S.A desde el año 2018 y que en el año 2021 fue la que llevó a dar por terminado el contrato de trabajo, pese a ello, considera la apelante que se trata de una situación que no exime de responsabilidad, y resalta la existencia de mala fe del empleador, al no existir un ánimo de cancelar, presentar abonos o negociar; igualmente existe mala fe por no comparecer al proceso pese a haber sido notificada.

Señala que FUREL S.A es una empresa que continuaba operando, tenía ingresos y ello no fue desvirtuado dentro de la contestación de la demanda, y en ese sentido, pudo llamar al demandante a un acuerdo. Reitera que pudo haber cubierto los derechos ciertos y llegar a un acuerdo de las indemnizaciones al ser la accionada quien tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato.

En ese sentido, solicita se reconozca que existe mala fe y se condene a la sanción establecida por el art. 65 del CST desde la terminación del contrato el 16 de febrero de 2021 hasta el pago efectivo de las acreencias.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada del actor sostiene que en el proceso fue probado del Interrogatorio de parte absuelto por la demandante, que en el tiempo que duró su relación laboral con Furel S.A, la demandante tuvo crecimiento profesional y tenía relación directa con los clientes y al momento de entrar la Sociedad de

Activos Especiales-SAE, y sus depositarios, se vio entorpecida; que la terminación del contrato por parte de la demandante, no fue libre y voluntaria; se demostró, que pese a la situación legal de Furel S.A, ésta seguía operando, terminando proyectos y recibiendo dinero por su actividad comercial, la acreencia laboral con la demandante, no había sido cancelada y no se encontraba que la empresa tuviese una autorización legal o contractual para no realizar el contrato, ni se observa voluntad de la accionada de citar a la trabajadora, por el contrario, Furel S.A y sus administradores utilizaron el estado de medida cautelar para incumplimientos con sus trabajadores. Invoca la sentencia SL 9641 de 2014, relacionada con la indemnización moratoria.

Solicita que por la falta de interés de pago y de asistir al proceso, en aplicación del art. 77 del CPT y SS se acepte como cierto todo lo susceptible de confesión.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de la indemnización moratoria del art. 65 del CST desde el 16 de febrero de 2021 hasta el pago de la información.

En primera instancia se absolvió del pago de la indemnización moratoria del art. 65 del CST, aduciendo que el contrato de la demandante finalizó el 16 de febrero 2021 sin pagar las prestaciones sociales, y la demandada informó que su incumplimiento se debe que no cuenta con recursos administrativos y financieros, dado que conforme con el oficio de junio de 2018, la Fiscalía General de la Nación decretó medida cautelar de embargo y secuestro, consecuente con disposición del poder dispositivo de FUREL S.A, que fue registrada en la Cámara de Comercio, por lo que dicha sociedad pasó a ser administrada por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS y según la medida decretada, la sociedad FUREL S.A no puede disponer del pago, y con base en ello, consideró el Juzgado que hay una justificación del no pago de las acreencias laborales no hay razón que justifique el obrar de mala fe de la accionada FUREL S.A.

Para el caso en concreto, no existe discusión además de que se encuentra probado en el expediente de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, que la Sra. Diana Cecilia Ramírez Zuluaga y la sociedad FUREL S.A.,

celebraron contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada el 20 de octubre de 2014 (anexo 1 del expediente digital 13); el 1º de junio de 2016, las partes firmaron otro si, donde se plasmó que a partir del 20 de octubre de 2014, el contrato sería a término indefinido (anexo 2); del certificado de existencia y representación se extrae *“Mediante Oficio No. 20185400060741 del 12 de junio de 2018, inscrito el 19 de junio de 2018 bajo el Registro No. 00169019 del libro VIII, la Fiscalía General de la Nación decreta la medida cautelar de embargo y secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo de la sociedad de la referencia.”* (fl. 22 del expediente digital 01); la sociedad FUREL S.A terminó unilateralmente el contrato de trabajo a la demandante, el 16 de febrero de 2021 (fl. 67); en comunicación del 7 de julio de 2021, FUREL S.A dando respuesta a derecho de petición de la demandante, expuso que la situación económica y jurídica de FUREL S.A era crítica desde junio de 2018, oportunidad en que está inmersa en proceso de extinción de dominio y de dicha situación era conocedora la demandante; que dicha medida generó que FUREL S.A no tenga nuevos proyectos y otros los tuvo que terminar por incumplimiento, viéndose adicionalmente agravada la situación por la pandemia y la declaración de aislamiento, lo que ha generado que la empresa no haya podido desarrollar su actividad económica principal; que la Compañía no contaba con recursos para pagar la nómina del poco personal y se le daba prioridad al pago de la nómina atrasada de los trabajadores (fl. 78 a 79).

Cierto es que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 691 de 2013, SL 16.884 de 2016, SL 2175 de 2022, entre otras, ha considerado que para imponer la indemnización moratoria del art. 65 del CST, se debe analizar la conducta del empleador y en caso de desentrañar que su actuar fue de mala fe se imponga la sanción. En forma concreta, la última de las sentencias expresó:

“Es un tema pacifico el hecho de que en tratándose de indemnización moratoria, la buena fe, equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, de que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin probidad o pulcritud (CSJ SL 691 de 2013).

Y es que la indemnización moratoria obedece a una sanción por el no pago de salarios y prestaciones sociales y no constituye una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al finiquitar el contrato de trabajo, deje de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudados o liquide indebidamente, de

ahí que la misma encuentre lugar cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones serias y atendibles de su conducta, en la medida que razonablemente lo hubiere llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales, lo cual de acreditarse conlleva a ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe, y en este caso no procedería la sanción prevista en los preceptos legales referidos (CSJ SL3288-2021, reiterada en CSJ SL5290-2021). (...)"

En ese sentido y al analizar la prueba en su conjunto, encuentra la Sala que el actuar de la sociedad FUREL S.A se basó en la buena fe sin que se evidencie el ánimo o la intención de vulnerar derechos de la Sra. Diana Cecilia Ramírez Zuluaga, conclusión a la que se llega, en vista que no existe duda de la existencia de una medida cautelar donde se decretó el embargo y secuestro de la empresa accionada, por parte de la Fiscalía General de la Nación en oficio No. 20185400060741 del **12 de junio de 2018**, y en la misma, se suspensión del poder dispositivo de la sociedad, sin embargo:

- Como consecuencia de lo anterior, el personal del comité de líderes de FUREL S.A, el **18 de septiembre de 2018** elevó comunicación a la Gerente de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS expusieron las circunstancias que se estaban presentando y que estaban generando consecuencias a la empresa, dentro de las cuales expresaron: 1) La imposibilidad de desarrollar y ejecutar el objeto social desde la imposición de la medida cautelar debido a la falta de una administración concreta, dado que el depositario provisional no le dio solución a algunos de los problemas, por lo que catalogaron que la situación de la empresa era de alerta; así mismo manifestaron que el tiempo transcurrido, no contaron con facturación electrónica, lo que impidió a la compañía obtener recursos, cumplimiento de diferentes obligaciones tributarias, imposibilidad de recuperar cartera vencida, cumplimiento de obligaciones contractuales con clientes, proveedores y contratistas, cancelar oportunamente la nómina y seguridad social de los trabajadores, entre otras; y se plasmó, que la accionada no había podido realizar gestiones favorables sobre 21 demandas ejecutivas y ante la falta de representación y de administración, se habían generado 10 medidas de embargo. 2) Ausencia de depósito provisional, y 3) celeridad en el nombramiento del nuevo depositario provisional (anexo 14 del expediente digital 13).
- Así mismo, el empleador FUREL S.A continuó con el vínculo laboral con la demandante, realizando el pago de salarios y prestaciones sociales en los años 2018 y 2019.

- Durante el confinamiento que hubo en virtud de la pandemia del Covid 19 y que tuvo lugar en el año 2020, le garantizó a la demandante el pago de los salarios hasta la terminación del contrato de trabajo que tuvo lugar el 16 de febrero de 2021.

Conforme a la prueba relacionada se desata, que pese a las dificultades presentadas a nivel administrativo y financiero, se encuentra demostrado el actuar de buena fe de la sociedad la accionada, al cumplió con su obligación legal de reconocer y pagar las acreencias laborales a la Sra. Diana Cecilia Ramírez Zuluaga de los años 2018-2019 y los salarios de 2018 a 2021 no obstante recaer en ella el embargo y secuestro, lo que llevará a CONFIRMAR la absolución de los intereses moratorios del art 65 del CST.

Costas en esta instancia en la suma de \$290.000 a cargo de la parte demandante, por no prosperar el recurso de apelación presentado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Costas en esta instancia en la suma de \$290.000 a cargo de la parte demandante, por no prosperar el recurso de apelación presentado.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-015-2021-00394-01
Radicado Interno 334-23



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: DIANA CECILIA RAMÍREZ ZULUAGA
DEMANDADOS	: FUREL S.A. Y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2021-00394-01
RADICADO INTERNO	: 334-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 18 de diciembre de 2023 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 18 de diciembre de 2023 a la
5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO